

7. LA CRISIS DEL SISTEMA DE PARTIDOS Y LOS INDEPENDIENTES

El independiente en política es aquel personaje que de alguna manera destaca en otros ámbitos de la vida pública y que si bien mantiene, por lo general, una cercanía de ideales

-
- 79 Salvo el peculiar caso del FSLN, en Nicaragua, esto es cierto en comparación con el resto de países. IU fue un frente conformado por partidos provenientes de la llamada nueva izquierda de los sesenta, sectores cristianos y el PCP. Este último, a diferencia de otros países, no fue ni la mayor ni más importante fuerza del frente.

o propuestas con algún partido político no compromete su actividad con la vida partidaria organizada; por lo tanto, se siente con la libertad de actuar en forma individual según sus propios principios y ética. Es, por lo general, una persona que busca constantemente el consenso y trata de conciliar intereses contrapuestos. Al haberse mantenido en los alrededores (o alejados) del quehacer político en forma directa, su figura no es controvertida. En el Perú de los ochenta, estas características, por el peso de las circunstancias, pasaron a convertirse en virtudes que los partidos intentaron reconocer. Ese fue el papel que jugaron los independientes por un buen tiempo. Fueron los partidos políticos quienes los buscaron para que los represente de mejor manera.

Quizá el ejemplo más importante es el que nos recuerda el fugaz Frente Democrático Nacional (FDR) para las elecciones presidenciales de 1945 que lanzó la candidatura de José Luis Bustamante y Rivero. Era un año muy especial porque se comenzaban a cicatrizar las heridas del colapso de la segunda guerra mundial con la derrota del eje nazi-nipo-fascista. Finalizaba el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Muchas fuerzas de la oposición buscaron la persona indicada para lanzar un candidato de consenso, es así que se pensó en el doctor Bustamante y Rivero, destacado jurista y ex-embajador en Bolivia, quien al encontrar la acogida del Apra, el PCP y grupos menores, aceptó la candidatura. Ganó abrumadoramente las elecciones de 1945. Posteriormente, en 1963 y 1966 los candidatos independientes, María Delgado de Odría y el ingeniero Jorge Grieve, encabezaron las listas de la coalición derechista APRA-UNO. Esta volvió a presentar, en 1967, a un candidato independiente, Enrique Chirinos Soto, quien más tarde se afiliaría al Apra. La izquierda, a fines del setenta también colocó en los primeros lugares a independientes, como Alberto Ruiz Eldredge (PSR), Víctor Cuadros y Carlos Malpica (UDP) y más tarde tuvo que ser encabezada con el nacimiento de IU, por otro independiente, Alfonso

Barrantes Lingán. AP, por su lado, probó suerte con otro independiente, Alfonso Grados Bertorini, en las municipales de 1983. Hasta aquí la relación de los independientes con los partidos políticos, a los que en muchas oportunidades representaron.

Sin embargo, hasta acá la situación se diferencia con el fenómeno ocurrido en estos últimos años. En aquella oportunidad, los independientes no estaban en capacidad de organizar nada al margen de los partidos establecidos en el sistema. Más allá de una izquierda representada por IU, un centro tomado por el Apra y una derecha por AP y PPC, la presencia de otros partidos e independientes fue prácticamente insignificante (Ver cuadros 11 y 12). Otro es el caso de los independientes que se colocaron fuera de los límites partidarios. El abrumador respaldo de éstos no era más que la expresión más clara de la crisis de representación de los partidos políticos. Esta no es, sin embargo, producto del trazo abrupto de acontecimientos inconexos. Más bien, representa la íntima relación que existe entre la cultura política peruana y las formas de ejercicio de la participación política.

A lo largo de la década los gobiernos, en forma consecutiva, han terminado desprestigiando y erosionando al propio sistema político y a la gestión pública en particular. Esto contribuyó a una frustración acumulada de vastos sectores sociales, con una clase política que se mostró incapaz de representarlos. Es así que la incredulidad hacia la elite fue ganando espacio, mientras las diferentes propuestas políticas se hundían en el enredado juego del poder, cuyas pocas reglas de juego eran, con frecuencia, olvidadas o violadas. En este contexto el sistema de partidos, que se conformó en la década postmilitar, solo podía ser mínimamente estable.

De otro lado, las instituciones políticas no solo no funcionaron eficientemente, sino que se mantuvieron distantes de

la sociedad civil, donde, por su parte, movimientos sociales y segmentos de la población demandaban al Estado en forma creciente y violenta. Las imágenes fueron delimitándose: parlamento apéndice del ejecutivo (esto válido en toda la década del ochenta); presidencialismo avasallador; municipios incapacitados de gobernar su localidad; burocracia endémica y, muchas veces, corrupta; políticas económicas corrosivas al bolsillo popular; demandas regionales permanentemente postergadas. En la medida que la distancia entre clase política y clases plebeyas se hizo dramática, los discursos políticos aparecieron significativamente demagógicos y oportunistas. Es así que todos los partidos políticos integrantes del abanico del sistema no solo no pudieron articular demandas, sino que sus adhesiones orgánicas fueron cada vez menores. En consecuencia, cada vez más la política aparece, ante los ojos de la mayoría, como el espacio de la ineficiencia y la mentira.

En este escenario, con una institucionalidad política precaria, golpeada duramente por la crisis económica y violencia política, y partidos políticos débilmente organizados, algunos líderes independientes fueron creando y articulando opinión sobre lo que debe ser el político y su relación con las maquinarias partidarias. Es así que, desde la derecha, con Vargas Llosa y desde la izquierda, con Barrantes, hicieron de la crítica a los partidos políticos su bandera, pero al interior de ello. Se asentaron y beneficiaron de su articulación con sus núcleos militantes y sus maquinarias pero, a la vez, contribuyeron también a erosionar la imagen de los partidos políticos. No era para menos. La desintegración política se manifestó abiertamente. Es así que en todos los partidos políticos se desarrollaron contradicciones internas muy duras: Alan García y Luis Alva en el Apra; Alfonso Barrantes y Javier Diez Canseco en IU; Alberto Borea y Ricardo Amiel en el PPC; socialcristianos y liberales en el Movimiento Liberal.

Si las adhesiones políticas electorales fueron siempre variables y volátiles, al final de la década, rompieron los canales

convencionales de los partidos políticos y, como un aluvión, buscaron sus propios cauces. Ricardo Belmont en noviembre de 1989 y Alberto Fujimori en 1990 lo demostraron.

Paradójicamente, veinte años después, Fujimori —como Velasco en su momento— quiere hacer política con un discurso antipartido. No quiere oxigenar el sistema de partidos y promover de democracia a los mismos, sino sobreponerse a él y sus integrantes. Aprovechó, en el inicio de su gobierno, la crisis que los atravesaba para reclutar militantes de AP, IS e IU, al margen de los partidos como en su momento también lo hizo el velasquismo con el Apra, la DC y el PCP, para posteriormente deshacerse de ellos. Sus inexistentes lazos con la institucionalidad política y social le otorgaron ventajas, pero debilitando el sistema político. A su vez, puso en dura prueba a éste forjado sobre la base de partidos políticos. Sin éstos, incapacitados de renovarse y desarrollar alternativas adecuadas para recobrar credibilidad, emergieron y se desarrollaron sin límite, dinámicas caudillescas y mesiánicas.

El punto alto de esta dinámica fue el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, cuando Fujimori clausura el Parlamento y otras instituciones, acompañado de un discurso antipartido, que logró aceptación ciudadana. Gracias a él y pese a la oposición internacional, Fujimori desarticuló las reglas de juego en un sistema en el que los partidos tenían importancia capital, para pasar a ser, luego de esta fecha, una de las instituciones más desacreditadas. Esto es grave pues ningún sistema político moderno se puede basar en precarios movimientos independientes. Su importante presencia no es síntoma de mayor democracia, como el discurso oficial trata de mostrar, sino de mayor precariedad y descomposición de la vida política.

Con los resultados de las elecciones del CCD, en noviembre de 1992, y las municipales, en enero de 1993, dentro del

plan de vuelta a la constitucionalidad pactada entre el gobierno de Fujimori y la comunidad internacional, el entusiasmo por el triunfo de los diversos matices de independientes (que lo único que los unifica es en la negación hacia los partidos políticos, ya sea por creencia o por oportunismo) se sumó la parálisis de los partidos políticos. Se concentran así, peligrosamente, todos los elementos para que se instale con fuerza (sancionada constitucionalmente por el CCD) autoritarismos de variadas formas, que tengan posibilidad de crecer e, incluso, tener éxito. Todo esto permitido en un contexto de permanencia de una pobreza extrema y violencia política. El autoritarismo populista tiene así amplio espacio para recoger aspiraciones ciudadanas (orden y eficiencia p.e.), canalizándolas en un discurso gubernamental furibundamente anti-partido y antidemocrático.

Todo lo anterior no debe llevar a olvidar que quienes tienen la primera responsabilidad de esa situación son los propios partidos políticos, quienes de otro lado han perdido todas las iniciativas políticas, actuando a la defensiva desde el 5 de abril de 1992. No solo esto sino que no han sabido enfrentar con audacia, renovación y posturas más firmes esa difícil coyuntura. La consecuencia es que no pudieron remontar a su favor el desprestigio que se monta sobre ellos. La desorientación, la falta de nuevas formas de hacer política y —no hay que olvidarlo— la oposición democrática al gobierno en un momento en que la ciudadanía mayoritaria está aún hipnotizada por el discurso autoritario, explican la baja votación de los partidos, en los dos últimos comicios.

Pero, la estrategia gubernamental también tiene su límite. Siempre los caudillos autoritarios pueden tener éxitos sobre los partidos, pero están incapacitados para poder construir sus sustitutos, es decir, nuevos partidos, como ocurre con los casos de los oficialistas Cambio 90 y, ahora, Nueva Mayoría. Esta tarea requiere, Fujimori lo sabe, maquinaria, doctrina

política, organización, liderazgos. La concentración y desconfianza de la que hace gala Fujimori se opone a ello. La consecuencia se pudo observar en las elecciones municipales: incapacidad para presentar candidaturas a nivel nacional, el retiro de su candidato oficial en Lima (dos hechos sin precedentes en la historia electoral peruana) y la derrota de cuatro de sus solitarias cinco candidaturas provinciales, en las municipales de 1993. El alto porcentaje del NO en el Referéndum expresan, en parte, también esto. Así, la popularidad presidencial no es endosable. Muchos de sus actos lo refuerzan a él y a nadie más.⁸⁰

Sin embargo, nada apunta a resoluciones de corto plazo, ni que los partidos políticos desaparezcan ni que la popularidad de Fujimori caiga irreversiblemente y lo imposibilite de realizar su proyecto autoritario, ni que los ahora presidencialiables, la mayoría figuras independientes, ya no lo sean mañana.⁸¹ La precariedad de la política peruana lo permite todo, pero también lo erosiona todo. Ese es el derrotero de la joven democracia peruana que fue una de las primeras que inició el camino de la transición democrática, a finales de los setenta, en América Latina.

80 Dos hechos se le atribuyen como fundamentales para la popularidad de Fujimori al inicio del tercer año, cuando sus dos predecesores en el mismo período ingresaban a un franco desprestigio: la baja de la inflación y la captura del líder senderista, Abimael Guzmán.

81 Uno de los componentes, es la forma en que se desarrolló el CCD, donde no participaron los más importantes partidos. Como nunca desde Palacio de Gobierno se monitoreó a su gusto a la bancada oficial, señalando las líneas centrales de la nueva constitución. Ella fue aprobada, contra el voto singular y de oposición del Dr. Chávez Molina, miembro del JNE, el 29 de diciembre de 1993. En ella se incorporó las exigencias y deseos de Fujimori, como la pena de muerte, la reelección presidencial inmediata, el referéndum y la posibilidad del cierre del Parlamento, por única vez en un período, a juicio arbitrario del Presidente. Se reforzó así el ya fuerte presidencialismo. Una institución sería como la Comisión Andina de Juristas señala, en relación con el proyecto de Constitución, que en lo sustantivo recoge la nueva Carta Magna, lo siguiente: "Difícilmente puede esperarse que este proyecto, en caso de aprobarse, contribuirá al fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el Perú", Comisión Andina de Juristas: *Análisis del Proyecto de Constitución*, Lima, julio de 1993, pag. 23.